

REPUBLICA ARGENTINA

Correo Argentina Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

69ª REUNIÓN — 28ª SESIÓN ORDINARIA (Continuación)

13 DE NOVIEMBRE DE 1996

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, doctor CARLOS F. RUCKAUF,  
del señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor EDUARDO MENEM  
y del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, doctor ALFREDO AVELÍN

Secretarios: doctor EDGARDO R. PIUZZI  
y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO y doctor DONALDO A. DIB

### PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.  
AGÜNDEZ, Jorge A.  
ALASINO, Augusto  
ALMIRÓN, Carlos H.  
AVELÍN, Alfredo  
BAUM, Daniel  
BAUZA, Eduardo  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BITTEL, Deolindo F.  
BRANDA, Ricardo A.  
CABANA, Fernando V.  
CAFIERO, Antonio F.  
CANTARERO, Emilio M.  
COSTANZO, Remo J.  
DE LA ROSA, Carlos L.  
DE LA SOTA, José Manuel  
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.  
FIGUEROA, José O.  
GAGLIARDI, Edgardo J.  
GALVÁN, Raúl A.  
GENOUD, José  
GIOJA, José L.  
HUMADA, Julio C.  
LEÓN, Luis A.  
LÓPEZ, Alcides H.  
LOSADA, Mario A.  
LUDUEÑA, Felipe E.  
MAC KATHY, César  
MAGLIETTI, Alberto Ramón  
MANFREDOTTI, Carlos  
MARANGUELLO, Pedro C.  
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.  
MASSAT, Jorge  
MAYA, Héctor M.  
MELGAREJO, Juan I.  
MENECHINI, Javier R.

MENEM, Eduardo  
MIRANDA, Julio  
MOREAU, Leopoldo R. G.  
OUDIN, Ernesto R.  
OYARZÚN, Juan C.  
PABLO, Ángel Francisco  
PRETO, Ruggero  
QUINZIO, Bernardo P.  
REUTEMANN, Carlos A.  
RIVAS, Olijela del Valle  
ROMERO FERIS, José A.  
SALA, Osvaldo R.  
SALUM, Humberto E.  
SAN MILLÁN, Julio A.  
SAPAG, Felipe R.  
SOLANA, Jorge D.  
STORANI, Conrado H.  
TELL, Alberto M.  
ULLOA, Roberto A.  
USANDIZAGA, Horacio  
VAQUIR, Omar M.  
VERNA, Carlos A.  
VILLARROEL, Pedro G.  
VILLAVEVERDE, Jorge A.  
YOMA, Jorge R.  
ZALAZAR, Horacio A.

### AUSENTES, CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo  
SÁEZ, José M.

### POR ENFERMEDAD:

VACA, Eduardo P.

### EN COMISION:

FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela  
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.

### POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

## SUMARIO

1. Asuntos entrados. (Pág. 6541.)
  - I. Promoción al grado inmediato superior del brigadier mayor don Rubén Mario Montenegro. Mensaje del Poder Ejecutivo. (Pág. 6541.)
  - II. Promoción al grado inmediato superior al señor jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas vicealmirante don Jorge Enrico. Mensaje del Poder Ejecutivo. (Pág. 6541.)
  - III. Promoción al grado inmediato superior al señor jefe de Estado Mayor General de la Armada vicealmirante don Carlos Alberto Marrón. Mensaje del Poder Ejecutivo. (Pág. 6541.)
2. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Educación en tres proyectos: uno, de ley venido en revisión, otro de ley del señor senador Usandizaga y el tercero de comunicación del señor senador Storani y otros señores senadores sobre Obras Sociales Universitarias (C.D.-65/95, S.-276/96 y 1.803/95). Se aprueba otro proyecto de ley con modificaciones. (Pág. 6542.)
3. Por indicación de la Presidencia se pasa a cuarto intermedio para constituir la Cámara en Tribunal de Juicio Político. (Pág. 6557.)
4. A moción del señor senador Quinzio se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución del señor senador Agúndez por el que se solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación del funcionamiento de la zona franca en la ciudad de Justo Daract, San Luis (S.-2.354/96). (Pág. 6557.)
5. Consideración de los dictámenes contenidos en los órdenes del día 1.213, 1.230, 1.233, 1.241, 1.242, 1.326, 1.327, 1.357, 1.384, 1.395, 1.401, 1.402, 1.424, 1.425, 1.445, 1.454 y 1.467, respectivamente (eventos vencidos): (Pág. 6558.)
  - I. Consideración del dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de comunicación del señor senador Costanzo por el que se solicita se declare de interés nacional el XXIII Encuentro Argentino de Minibásquetbol 1996 a llevarse a cabo del 11 al 13 de octubre en Capital Federal y el Gran Buenos Aires (S.-1.769/96). (Pág. 6558.)
  - II. Consideración del dictamen de la Comisión de Turismo en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se manifiesta su agrado e interés legislativo por la realización del "Primer Foro Nacional de Municipios Turísticos" organizado por la Facultad de Estudios Turísticos de la Universidad de Morón, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de octubre del corriente año (S.-1.882/96). (Pág. 6559.)
  - III. Consideración del dictamen de la Comisión de Familia y Minoridad en el proyecto de declaración de la señora senadora Rivas por el que se declaran de interés cultural y educativo las IV Jornadas Nacionales de Ética y II Congreso Nacional Interdisciplinario de Ética Aplicada bajo el tema "Ética y niñez" a desarrollarse del 31 de octubre al 2 de noviembre del corriente año en la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" de la ciudad de Buenos Aires (S.-885/96). (Pág. 6559.)
  - IV. Consideración del dictamen de las comisiones de Ecología y Desarrollo Humano y de Turismo en el proyecto de declaración del señor senador Ludueña por el que se declara de interés ambiental el Taller de Trabajo "Península de Magallanes" a desarrollarse del 3 al 7 de octubre de 1996 en El Calafate, Santa Cruz (S.-1.662/96). (Pág. 6560.)
  - V. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de resolución de la señora senadora Rivas por el que se declara de interés para el Honorable Senado la realización del ciclo anual de actualización docente IX Encuentro Nacional Docente de Intercambio y Actualización organizado por la revista "Novedades Educativas" que se realizó en Buenos Aires durante los días 14 y 15 de septiembre de 1996 (S.-1.473/96). (Pág. 6561.)
  - VI. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de resolución de la señora senadora Rivas por el que se declara de interés educativo el XX Encuentro Nacional y III Internacional de Educación a Distancia organizado por la Asociación Argentina de Educación a Distancia, a realizarse en Buenos Aires los días 26 y 28 de septiembre de 1996 (S.-1.490/96). (Pág. 6562.)
  - VII. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de declaración del señor senador Manfredotti y otros señores senadores por el que se declara de interés legislativo el V Encuentro y I Congreso de Profesores de Literatura Infantil y Juvenil "Literatura e Identidad al Siglo XXI" a realizarse entre el 19 y el 21 de septiembre del corriente año en la ciudad de Comodoro Rivadavia, organizado por la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, juntamente con la Universidad Nacional del Comahue (S.-1.544/96). (Pág. 6563.)
  - VIII. Consideración del dictamen de las comisiones de Cultura y de Población y Desarrollo en el proyecto de comunicación del señor senador San Millán por el que se solicita se declaren de interés nacional las IX Jornadas Precolombinas "El Renacer de

título 49 inciso 2° de la Ley para el Personal Militar 19.101 y sus modificatorias.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.289

CARLOS S. MENEM.

Jorge M. R. Domínguez.

—A la Comisión de Acuerdos.

2

## OBRAS SOCIALES UNIVERSITARIAS

**Sr. Presidente (Menem).** — Corresponde continuar con la consideración de los órdenes del día ya acordados.

En primer lugar, el dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Educación en tres proyectos: uno de ley venido en revisión, otro de ley del señor senador Usandizaga y el tercero de comunicación del señor senador Storani y otros señores senadores sobre Obras Sociales Universitarias. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley que deberá considerarse como modificación del venido en revisión. (Orden del Día 1006.)

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (PiuZZi).** — (Lee)

### Dictamen de comisiones

#### Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Educación han considerado el proyecto de ley venido en revisión sobre obras sociales universitarias (C.D.-65/95); el proyecto de ley del señor senador don Horacio Usandizaga, derogando el decreto 903/95 sobre obras sociales universitarias (S.-276/96); y el proyecto de comunicación del señor senador don Conrado Storani y otros señores senadores, solicitando la derogación del mencionado decreto (S.-1.803/95); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente proyecto de ley, que deberá considerarse como modificación del venido en revisión:

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, ...*

### LEY DE OBRAS SOCIALES UNIVERSITARIAS

#### Definición

**Artículo 1º** — Las obras sociales de las universidades nacionales, excluidas por la ley 23.890 del régimen general normado por la ley 23.660, son entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa y tendrán el carácter de sujeto de derecho conforme lo establece el Código Civil para las entidades con personería jurídica.

Las mismas serán libres de celebrar convenios y recibir, en calidad de adherentes, afiliados de otras obras sociales, de acuerdo a las normas que establezcan la legislación vigente y los respectivos estatutos.

Asimismo, se garantiza por la presente el derecho de los trabajadores universitarios a la libre elección de la obra social.

**Art. 2º** — En aquellas universidades en las que no existan obras sociales universitarias, las mismas podrán ser creadas conforme lo establecido en la presente ley o podrán mantenerse en la cobertura actual, mediante convenios u otros instrumentos jurídicos, de acuerdo a la voluntad de los trabajadores universitarios respectivos.

#### Objetivos

**Art. 3º** — Son objetivos de las obras sociales universitarias:

- a) Brindar prestaciones con la mayor cobertura en servicios de salud;
- b) Dar prestaciones sociales que beneficien a sus miembros.

#### Beneficiarios

**Art. 4º** — Son beneficiarios de las obras sociales universitarias:

- a) Como miembros titulares: las autoridades superiores, el personal docente y el personal no docente de las universidades nacionales;
- b) Quedan también incluidos:

— Los grupos familiares primarios de los afiliados incluidos en el inciso a). Se entiende por tal al integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta los veintiún (21) años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad comercial, laboral o profesional; los hijos solteros mayores de veintiún (21) años y hasta los veinticinco (25) años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular, que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente; los hijos incapacitados a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún (21) años, los hijos del cónyuge, los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este inciso.

— Las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato familiar. Este deberá acreditarse a través de las normas que al respecto establezca cada obra social;

- c) Podrán asimismo incorporarse adherentes, conforme a las pautas que establezcan los respectivos estatutos o resoluciones internas.

*Gobierno*

Art. 5º — Cada obra social se organizará de acuerdo a sus estatutos, debiendo estar integrado el consejo directivo con representantes de los docentes y no docentes afiliados, y una representación del consejo superior de la universidad respectiva.

Art. 6º — El consejo directivo será conducido por un presidente, que será elegido por sus integrantes.

Art. 7º — Serán funciones del consejo directivo:

- a) Proponer el estatuto de funcionamiento y las modificaciones que sobre él deban realizarse a la asamblea de afiliados titulares de la obra social, la que resolverá sobre su aprobación;
- b) Resolver sobre temas que hacen a la ejecución del presupuesto y al nombramiento y remoción del personal;
- c) Ejercer el control de su patrimonio y la prestación y ampliación de servicios.

*Presupuesto y patrimonio*

Art. 8º — Integran el presupuesto y patrimonio de las obras sociales:

- a) Una contribución de la universidad del seis por ciento (6 %) de las remuneraciones de sus empleados;
- b) Un aporte a cargo de los empleados del tres por ciento (3 %) de su sueldo;
- c) Un aporte a cargo de miembros adherentes según una cifra a determinar por el consejo directivo;
- d) Las donaciones, legados, contribuciones y subsidios que pudieren percibir;
- e) Los bienes muebles e inmuebles que hayan logrado y logren mediante su propia disponibilidad financiera.

El consejo directivo de cada obra social podrá disponer que el aporte a cargo del empleado del tres por ciento (3 %) sobre el sueldo pueda calcularse sobre una base mínima igual a la jornada completa.

Los beneficiarios de la presente ley, ya sea como beneficiarios titulares o como miembros del grupo familiar primario, que estén afiliados a otro agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud, deberán optar por una sola obra social y unificar su afiliación y aportes.

*Autoridad de aplicación*

Art. 9º — Será autoridad de aplicación de la presente ley, en todo aquello que tenga relación con las prestaciones médico asistenciales, el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

*Disposición transitoria*

Art. 10. — Las obras sociales actualmente existentes tendrán un lapso de doscientos setenta (270) días, a

partir de la sanción de la presente, a efectos de adecuar estatutos y producir la integración de las nuevas autoridades conforme a los mismos y a lo determinado por esta ley.

Art. 11. — Déjanse sin efecto las disposiciones del decreto 903/95 y toda otra norma que se oponga a la presente.

Art. 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores (texto ordenado 1995), el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 10 de julio de 1996.

*Enrique Martínez Almudevar. — Julio A. Miranda. — Olijela del Valle Rivas. — Alcides H. López. — Omar M. Vaquir. — Alberto M. Tell. — Antonio F. Cafiero. — Cristina E. Fernández de Kirchner. — Raúl A. Galván. — Daniel Baum. — Carlos H. Almiron. — Alfredo Avelin.*

En disidencia parcial:

*Humberto E. Salum. — Conrado H. Storani.*

## ANTECEDENTES

## I

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(13 de septiembre de 1995)

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, ...*

## LEY DE OBRAS SOCIALES UNIVERSITARIAS

*Definición*

Artículo 1º — Las obras sociales de las universidades nacionales, excluidas por la ley 23.890, son entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa, y tendrán el carácter de sujeto de derecho conforme lo establece el Código Civil para las entidades con personería jurídica.

Las mismas serán libres de celebrar convenios y recibir en calidad de adherentes afiliados de otras obras sociales, de acuerdo a las normas que establezcan la legislación vigente y los respectivos estatutos.

Asimismo, se garantiza por la presente, el derecho de los afiliados a la libre elección de la obra social.

Art. 2º — En aquellas universidades en las que no existan obras sociales universitarias, las mismas podrán ser creadas conforme lo establecido en la presente ley o podrán mantenerse en la cobertura actual, mediante convenios u otros instrumentos jurídicos, de acuerdo a la voluntad de la comunidad universitaria respectiva.

*Objetivos*

Art. 3º — Son objetivos de las obras sociales universitarias:

- a) Brindar prestaciones con la mayor cobertura en servicios de salud;
- b) Dar prestaciones sociales que beneficien a sus miembros.

*Beneficiarios*

Art. 4º — Son beneficiarios de las obras sociales universitarias:

- a) Como miembros titulares: las autoridades superiores, el personal docente y el personal no docente de las universidades nacionales;
- b) Quedan también incluidos:

— Los grupos familiares primarios de los afiliados incluidos en el inciso a). Se entiende por tal al integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta los 21 años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio profesional de actividad comercial, laboral o profesional; los hijos solteros mayores de 21 años y hasta los 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular, que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente; los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de 21 años, los hijos del cónyuge, los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este inciso.

— Las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato familiar. Este deberá acreditarse a través de las normas que al respecto establezca cada obra social;

- c) Podrán asimismo incorporarse adherentes, conforme a las pautas que establezcan los respectivos estatutos o resoluciones internas.

*Gobierno*

Art. 5º — Cada obra social se organizará de acuerdo a sus estatutos debiendo estar integrado el consejo directivo con representantes docentes, no docentes y del consejo superior de la universidad respectiva.

Art. 6º — El consejo directivo será conducido por un presidente, que será designado o elegido por cada obra social universitaria, según sus estatutos.

Art. 7º — Serán funciones del consejo directivo:

- a) Proponer el estatuto de funcionamiento y las modificaciones que sobre él deban realizarse al consejo superior, quien resolverá sobre su aprobación;
- b) Resolver sobre temas que hacen a la ejecución del presupuesto y al nombramiento y remoción del personal;

- c) Ejercer el control de su patrimonio y la prestación y ampliación de servicios.

*Presupuesto y patrimonio*

Art. 8º — Integran el presupuesto y patrimonio de las obras sociales:

- a) Una contribución de la universidad no inferior al 6 por ciento de las remuneraciones de sus empleados;
- b) Un aporte a cargo de los empleados no inferior al 3 por ciento de su sueldo;
- c) Un aporte a cargo de miembros adherentes según una cifra a determinar por el consejo directivo;
- d) Las donaciones, legados, contribuciones y subsidios que se pudieren percibir;
- e) Los bienes muebles e inmuebles que hayan logrado y logren mediante su propia disponibilidad financiera o donaciones.

Los aportes y contribuciones deberán calcularse sobre una base mínima igual a la jornada completa.

*Autoridad de aplicación*

Art. 9º — Será autoridad de aplicación de la presente ley cada una de las universidades, las que darán el encuadre necesario para el funcionamiento legal de cada obra social.

*Disposición transitoria*

Art. 10. — Las obras sociales actualmente existentes tendrán un lapso de 270 días, a partir de la sanción de la presente, a efectos de adecuar estatutos y producir la integración de las nuevas autoridades conforme a los mismos y a lo determinado por esta ley.

Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.  
Esther H. Pereyra Arandía  
de Pérez Pardo.

## II

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, ...*

Artículo 1º — Derógase el decreto del Poder Ejecutivo 903 dictado el 11 de diciembre de 1995 por el que se establece un régimen para aquellas obras sociales que se organicen en las universidades nacionales.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Horacio D. Usandizaga.

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Las obras sociales universitarias constituyen un servicio de salud que en su conjunto atiende aproximadamente 500.000 beneficiarios en nuestro país, personal docente y no docente, y respectivos grupos familiares primarios.

Nacieron y se desarrollaron bajo la administración y control de las universidades, en correspondencia con

los principios de autonomía y autarquía universitarias. A través de ellas y de las prestaciones médico-asistenciales, las casas de altos estudios ejercen la dirección y control de la salud de los integrantes de su comunidad.

La ley 23.660, de enero de 1989, al crear el nuevo Régimen de Obras Sociales instituyó como su organismo de aplicación a la DINOS e incluyó dentro de sus previsiones a las obras sociales universitarias.

Posteriormente, en octubre de 1990, la ley 23.890 modificó la 23.660 y exceptuó expresamente a las obras sociales de las universidades nacionales del régimen general (artículo 4º).

Las universidades volvieron entonces a constituirse en autoridades de aplicación y control de sus propias obras sociales.

Sin embargo, el decreto del Poder Ejecutivo 903 de diciembre de 1995, desconoció la excepción de la ley 23.890, disponiendo que las obras sociales que se hubieren organizado u organicen en universidades nacionales deben ser entidades de derecho público no estatal con individualidad jurídica financiera y administrativa.

Según la disposición reglamentaria, tendrán dichas instituciones el carácter de sujeto de derecho con el alcance que el Código Civil establece para las personas jurídicas.

El artículo 2º del decreto establece un plazo de tres meses para adecuar las obras sociales universitarias, en tanto que el tercero otorga al Ministerio de Salud y Acción Social el rol de autoridad de aplicación.

El decreto pretende modificar las disposiciones de una ley, lesionando el régimen constitucional. Una norma inferior supedita a una norma superior y especial.

Los hechos así descritos motivan el presente proyecto cuyo justificante principal es restablecer el principio de supremacía de las leyes contenido en el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Se trata del ejercicio por parte del Poder Ejecutivo nacional de facultades legislativas que le están vedadas y de ninguna manera de potestades reglamentarias tal como expresan los fundamentos del decreto. El decreto modifica expresamente la ley 23.890, alterando su espíritu (inciso 2, artículo 99 de la Constitución Nacional).

Pero, asimismo, el proceder ilegítimo crea una situación de incertidumbre y lesiona a la comunidad universitaria.

No se respetan los principios de autonomía y autarquía universitarios, se concentran facultades en el órgano ejecutivo a través del protagonismo del Ministerio de Salud y Acción Social, se aleja a los beneficiarios de la conducción y control de su propia obra social y se amenaza la continuidad de las prestaciones en tanto los edificios y equipamiento de las obras pertenecen al patrimonio universitario y el personal de las mismas tiene relación de dependencia con las universidades.

Se desconoce de igual forma el pronunciamiento favorable de la Cámara de Diputados de la Nación so-

bre un proyecto de ley de Obras Sociales Universitarias (Orden del Día Nº 1.683-D.-95, aprobada el 13 de septiembre de 1995 y publicada su sanción en el Diario de Asuntos Entrados del Senado Nº 102).

Esta iniciativa unifica los proyectos de los diputados Aceñolaza (expediente 182-D.-95), Armendáriz (expediente 205-D.-95) y Corchuelo Blasco (1966-D.-95).

El texto sancionado establece el carácter de entidades de derecho público no estatal de las obras sociales universitarias, con individualidad jurídica, financiera y administrativa y con carácter de sujeto de derecho conforme el Código Civil (artículo 1º). Determina que cada obra se organizará de acuerdo a sus estatutos, debiendo estar integrado el consejo directivo con representantes docentes, no docentes y el consejo superior de la universidad respectiva (artículo 5). Se conforma su presupuesto y patrimonio con las contribuciones de la universidad, de los empleados, del aporte de los miembros adherentes, las donaciones y legados y los bienes muebles e inmuebles logrados mediante su propia disponibilidad financiera o donaciones (artículo 8). Como autoridad de aplicación se instituye a cada una de las universidades, las que deberán brindar el encuadre necesario para el funcionamiento legal de cada obra social (artículo 9º).

El citado proyecto cuenta con el apoyo del Consejo de Obras Sociales de Universidades Nacionales. Este organismo en su reunión celebrada en Comodoro Rivadavia los días 23 y 24 de noviembre próximo pasado, con la presencia de representantes de 21 obras sociales universitarias, solicitó a los señores senadores de la Nación la pronta sanción del proyecto de ley en consideración coincidiendo en que el mismo es un adecuado instrumento legal para mantener el desarrollo de esas instituciones.

Sin más, solicitamos a los señores legisladores el análisis del presente y su consideración pronta y favorable.

*Horacio D. Usandizaga.*

### III

#### Proyecto de comunicación

##### *El Senado de la Nación*

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle que deje sin efecto el decreto 903/95 de fecha 11 de diciembre de 1995 que dispone un Régimen para las Obras Sociales que se organicen en las universidades nacionales, por ser violatorio de la Constitución Nacional que consagra los principios de autonomía y autarquía universitaria y por constituir una peligrosa inferencia del Poder Ejecutivo nacional en asuntos que son de absoluta incumbencia de cada universidad.

*Conrado H. Storani. — Eduardo C. Angeloz. — Jorge A. Agúndez. — Luis A. León. — Jorge Genoud. — Daniel Baum. — Alfredo Avelín.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El Poder Ejecutivo nacional pretende consumir un nuevo avance sobre la autonomía de las universidades nacionales, esta vez mediante el establecimiento de un régimen jurídico obligatorio para todas las obras sociales universitarias.

Me refiero al decreto 903/95 del 11 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial el 18 de diciembre de 1995.

La citada norma reglamentaria fija un plazo perentorio de tres meses para que las obras sociales organizadas o que se organicen en el futuro en universidades nacionales se constituyan como entidades de derecho público no estatal con el alcance que el Código Civil establece para las personas jurídicas.

Por el artículo 3º del decreto 903/95 se dispone además que, será el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación la autoridad de aplicación de la norma, facultándolo para dictar resoluciones aclaratorias e interpretativas de la misma.

Conforme a la estructura normativa que regula el quehacer universitario, es decir la Constitución Nacional que consagra los principios de autonomía, autarquía y gratuidad, la Ley de Educación Superior que instrumenta los principios constitucionales y los estatutos que cada universidad dicta en ejercicio de su autonomía, las universidades nacionales deben conservar para sí el gobierno y control de sus obras sociales.

Es en la provincia que represento en este Honorable Senado donde se funda la primera universidad nacional y donde se gesta en 1918 el movimiento estudiantil conocido como Reforma Universitaria.

Hoy, quizás más que nunca, cobra renovada vigencia el mensaje reformista que se difundió luego por toda Latinoamérica: la universidad abierta al pueblo, la libertad de pensamiento y de cátedra, el cogobierno universitario y la autonomía.

¿Por qué afirmamos la necesidad de salvaguardar el principio de autonomía institucional, académica y administrativa para las universidades nacionales?

No porque el mismo signifique una vía de segregación de la universidad del resto de la comunidad ni un apartamiento de los fines del Estado, sino porque la autonomía pone a la universidad al amparo de los vaivenes políticos y de los intereses económicos sectoriales y le garantiza la posibilidad de organizar su vida académica, de investigación y de extensión.

De modo que la autonomía resulta un requisito esencial para la vida de la universidad que no puede florecer sometida a controles del poder político.

Resulta inadmisibles que por una norma de rango inferior, como lo es un decreto, se pretenda desconocer el poder de autolegislación, autoadministración y autogobierno que gozan las universidades en un régimen efectivo y real de autonomía.

En muy estrecha relación con la autonomía se encuentra el principio de autarquía económico-financiera de las universidades, es decir, la capacidad para administrar su patrimonio y disponer de sus recursos.

Resulta además llamativo que el Poder Ejecutivo, justamente ahora las obras sociales universitarias o se encuentra a consideración de esta Honorable Cámara un proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados sobre el mismo tema.

Dicha iniciativa tuvo un amplio consenso paritario y reconoce a cada universidad nacional el derecho a dar a sus obras sociales el encuadre legal que mejor le parezca.

El presente proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo recoge la preocupación de toda la comunidad universitaria en el sentido de evitar que las obras sociales universitarias no queden excluidas de la órbita de la competencia de las propias universidades. Estas deben conservar para sí el gobierno y control de las obras sociales, de lo contrario se estaría menoscabando seriamente la autonomía, pilar fundamental de la libertad de conocimiento científico en nuestro país.

*Conrado H. Storani. — Eduardo C. Angulo.*

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por la provincia de Pampa del bloque justicialista.

Sr. Martínez Almudevar. — Señor presidente, señores senadores: hoy vamos a considerar el proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados referido a las obras sociales universitarias. En definitiva, se trata de establecer un conjunto normativo que las regule.

En este momento se encuentran funcionando distintas formas organizativas de las obras sociales universitarias. Algunas actúan como dependencias de obras sociales dependientes de una de las universidades; otras, están funcionando bajo el régimen general de obras sociales sindicales al amparo de la ley 23.660; y finalmente, las que no poseen obras sociales celebradas convenios, por ejemplo, con entidades provinciales y de esta manera, están instaladas en la prestación de este servicio asistencial a la familia universitaria.

Vamos a respetar esta forma organizativa como lo hace la sanción de la Cámara de Diputados, pero vamos a establecer una serie de modificaciones que, a nuestro criterio, vienen a poner armonía entre los distintos factores en juego en lo que atañe a los alcances de las obras sociales.

En primer lugar, en la sanción de la Cámara de Diputados se establecen una serie de artículos que pueden considerarse como necesarios dentro de lo que es el régimen que regula las obras sociales en general.

Una de las cuestiones que merecen que hagamos este tipo de reflexiones es la referida

autonomía universitaria. Pensamos —así lo expresa el dictamen en mayoría de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública y de las demás comisiones intervinientes— que es imprescindible armonizar el principio de autonomía de las universidades, así como también tener en consideración la irrenunciabilidad del Estado en lo que se refiere a la tutela del bien común en aquellas materias que hacen a sus responsabilidades, como es la salud pública.

Debemos pensar que a partir del momento de la sanción de la ley 23.660, de obras sociales gremiales, muchas cosas han permanecido y muchas otras se han modificado. Entre las que han permanecido igual al momento de la sanción se encuentra precisamente, la autonomía universitaria. Este principio, que hoy defendemos con la misma fuerza con que se lo hacía antes, con el objeto de salvaguardar y proteger la libertad de cátedra, ha tenido una sola modificación, referida a su incorporación a la Constitución Nacional, lo que ha tenido lugar en la reforma de 1994. Pero esta nueva jerarquía jurídica que se le otorga a este principio no significa la modificación de la naturaleza en sí misma, sino que ha sido simplemente una ratificación unánime que se ha otorgado a partir de su incorporación en nuestra Carta Magna.

Lo que digo señor presidente, es que lo mismo que decíamos antes lo seguimos manifestando hoy respecto a la autonomía universitaria. Solamente se ha modificado por su incorporación a la Carta Magna que rige a partir de 1994. Esto, con el objetivo de preservarla de cualquier tipo de avatares políticos.

Dicho esto, volvemos a lo que ocurrió en 1988, cuando en este recinto se sancionaba la ley de obras sociales. En esa circunstancia se encontraban incluidas dentro de lo que era el seguro nacional de salud tanto las obras sociales universitarias como la obra social del Poder Judicial. También el dictamen de la comisión incluía en este régimen a nuestra propia obra social, la DAS. Una intervención del entonces senador Edgardo P. V. Murguía hizo que la DAS quedara fuera del sistema.

En ese momento no se pensó que se estaba lesionando la autonomía universitaria, al dejar dentro del régimen de la ley 23.660 —que regula a las obras sociales sindicales— a la obra social universitaria y a la del Poder Judicial. Debemos recordar que en esas circunstancias quienes ejercían el gobierno de la Nación eran precisamente de la Unión Cívica Radical; de la que no podemos poner en duda el rol de la de-

fensa que históricamente siempre mantuvo con respecto a la autonomía universitaria.

Más aún, al quedar dentro del régimen de la ley 23.660 estaban bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Y no solamente eso, sino que también administrativamente quedaban supeditadas a la ANSSAL.

Sin embargo, bajo estas circunstancias esta ley se aprobó por unanimidad. Criterios posteriores y modalidades operativas, que era necesario tener en cuenta, aconsejaron luego la sanción de la ley 23.890, que excluyó del régimen general de las obras sindicales a las obras sociales de la Universidad y del Poder Judicial de la Nación. Sin embargo, inmediatamente pudieron observarse las consecuencias de este acto legislativo.

Las obras sociales que otrora fueron direcciones de esas instituciones de enseñanza superior no poseían la capacidad jurídica para asumir compromisos contractuales que sus funciones demandaban. Si en alguna circunstancia lo hacían por delegación, debemos suponer —por lo menos en teoría— que los contratos que se realizaban podían comprometer, de alguna manera, tanto el patrimonio como el presupuesto de las obras sociales universitarias. De allí surgió la necesidad de la sanción del decreto 903/95, que hoy venimos a reemplazar por esta ley. Dicho decreto otorgó a las obras sociales universitarias una personería jurídica que las distingue de las mismas universidades en las cuales nacieron. Ya dejan de ser direcciones de ese ente superior para funcionar como personas jurídicas de derecho público no estatal con todos los alcances que el artículo 1º de esta norma les otorga.

El presente proyecto de ley también recoge todo un bagaje de conceptos que la práctica ha ido incorporando a este tema. Por ejemplo, se asume el principio de que las obras sociales son de los trabajadores que aportan para su mantenimiento. Por eso deben ser ellos, tanto docentes como no docentes, los que deben ejercer la conducción de las obras sociales universitarias, sin excluir de ella la participación del consejo superior.

Pero que se entienda bien: la referida participación del consejo superior no se debe al aporte o contribución que hacen a la obra social, dado que esa contribución no es más que una parte del salario diferido, sino que tiene el objeto —según entendemos— de tender a facilitar la gestión operativa de la obra social.

Asimismo, es importante tener en cuenta que el presente proyecto de ley prevé la incorporación a las obras sociales universitarias de afi-

liados que no necesariamente pertenecen a la comunidad universitaria; es decir, se trata de que las obras sociales universitarias abran sus puertas para ofrecer sus servicios a toda la comunidad, lo cual nos parece sumamente positivo para demostrar una vez más que las universidades no son islas.

Por ello, señor presidente, la expresión mayoritaria de las comisiones intervinientes considera que en todo aquello que sea relativo a las prestaciones médico-asistenciales será autoridad de aplicación el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

No es nuestra intención que dicho ministerio se entrometa en las cuestiones administrativas de las universidades, pero sí queremos dejar sentado que tratándose de prestaciones de carácter obligatorio y que trascienden el marco de los afiliados de la propia comunidad universitaria, el Estado necesita ejercer el rol tutelar en una materia que, por su competencia, es de su incumbencia, como lo es en este caso, lo atinente al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

No se pretende que exista ningún tipo de avasallamiento de la autonomía y la autarquía universitarias. Más aún; con esta norma, de alguna manera, estamos extendiendo esa autonomía a una persona jurídica que si bien nació como parte de la universidad, hoy pasa a tener una identidad propia en el mundo universitario, encontrándose al servicio de la comunidad en su conjunto.

Creemos que estamos realmente ante una fórmula de equilibrio que respeta en forma armónica tanto la necesaria autonomía de las universidades, de los centros de enseñanza superior, como también el derecho de las personas a que se les otorgue prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, recuperación, protección y rehabilitación de la salud, logrado todo ello en el marco del mejor nivel de calidad disponible y garantizando a los beneficiarios la obtención de un tipo de nivel de prestaciones, eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva.

Dicho esto pasaré a mencionar aquellas modificaciones que creemos convenientes hacerle al dictamen que estamos analizando.

Proponemos modificar el artículo 1º del proyecto de ley. Si bien esto es una cuestión casi de forma o de precisión jurídica, nuestro objetivo es señalar la exclusión, por la ley 23.890, del régimen de obras sociales sancionado por la ley

23.660. Esta es una modificación que aclarará qué cosas excluía la ley 23.890.

La sanción de Diputados trae como innovación la libertad de afiliación de los trabajadores universitarios. Tal vez ésta sea la primera vez que una ley admite explícitamente la libertad de afiliación.

La norma vigente, o sea la ley 23.660 es ambigua en este sentido dado que ni lo permite ni lo excluye. No obstante, el decreto 903 del 19 de enero de 1995, que no fue reglamentado por la ANSSAL, explicita en su artículo 1º que los afiliados a las obras sociales tendrán libre elección de las mismas dentro del régimen comprendido por esta ley.

El criterio de la sanción de Diputados es funcional, en el mismo sentido que la norma vigente para el resto de las obras sociales. En nuestro dictamen en mayoría convalidamos la libre elección.

En los artículos 2º y 3º no se introducen modificaciones. En el artículo 5º se establece que el consejo directivo de la obra social debe estar integrado por representantes de los afiliados docentes, no docentes y del consejo superior de la universidad. El dictamen agrega que los miembros del consejo directivo deben estar afiliados a la obra social, y reduce la participación de la conducción universitaria a una representación del consejo superior.

El criterio que se puede plantear a través de esta modificación es entablar otra vez los alcances de la autonomía universitaria. Nosotros creemos que la autonomía universitaria termina cuando empiezan los derechos de los trabajadores. O lo que es lo mismo: que los trabajadores universitarios primero son trabajadores y luego universitarios.

Donde considero que las modificaciones son sustanciales y que traen un impacto de suma importancia es en el artículo 8º, que se refiere al mecanismo de financiamiento de las obras sociales universitarias.

En el caso particular de los aportes y las contribuciones, la sanción de Diputados establece que deben ser calculados en base a las jornadas completas de los trabajadores. Esto tiene una incidencia de suma trascendencia no solamente en las contribuciones que es lo que hace la patronal —en este caso la Universidad y concretamente el Estado nacional— sino también en los aportes, que los hacen los trabajadores sobre sus asignaciones.

De acuerdo con la sanción de la Cámara de Diputados el cálculo se hace sobre jornada com-

pleta, lo que en materia de contribuciones a cargo del Estado nacional significa un incremento de alrededor de 77 millones de pesos anuales. Esto no nos parece oportuno ni factible de lograr teniendo en cuenta la situación presupuestaria actual. En consecuencia, hemos modificado esa disposición dejando establecido que las contribuciones se harán de acuerdo con los salarios de bolsillo, de tal manera que la contribución será del 6 por ciento de los aportes salariales.

En cuanto a los aportes que efectúan los trabajadores, debemos tener en cuenta que se plantea una situación de verdadera injusticia, ya que los salarios más bajos son los de los no docentes, y como éstos trabajan tiempo completo su sueldo de bolsillo es superior al que perciben muchos docentes, en particular quienes se desempeñan con dedicación parcial o semiparcial.

De tal manera que siendo los aportes de los trabajadores no docentes superiores a los de los docentes de tiempo parcial, se produce una situación de tremenda injusticia, porque aquellos que menos ganan están subsidiando a quienes tienen mayores posibilidades de percepción salarial, teniendo en cuenta que es evidente que los docentes de tiempo parcial tienen posibilidad de obtener otros recursos además de los que perciben por las horas de cátedra que pueden dar en la universidad.

Entonces, en función de que en conjunto este sector representa un número no despreciable de la masa de docentes de las universidades —alrededor del 70 por ciento, esto es, aproximadamente 77 mil docentes— se puede advertir claramente el déficit que se produce con respecto a estos aportes.

Por eso, en nuestro dictamen hemos dejado a criterio del consejo directivo de las obras sociales la posibilidad de que establezca —ya que se compone con los trabajadores— un incremento en los aportes de los docentes de tiempo parcial, ello calculado sobre la jornada completa. De esta manera se establecería una situación de justicia, dado que tanto unos como otros pueden hacer uso de los beneficios de la obra social en las mismas condiciones.

Estas son las modificaciones sustanciales que proponemos al artículo 8º del proyecto en consideración.

Con respecto a los aportes y contribuciones, se establece una contribución del 6 por ciento de las remuneraciones de los empleados, y un aporte a cargo de los empleados del 3 por ciento de sus sueldos, porque no entendemos la razón

para que en este caso exista un régimen distinto al resto de las obras sociales sindicales.

En cuanto al artículo 9º, la sanción de la Cámara de Diputados dispone que las universidades son el organismo de aplicación de la ley. Por los argumentos que he planteado anteriormente, el dictamen de mayoría establece que en lo atinente a las prestaciones médico-asistenciales debe ser el Ministerio de Salud y Acción Social quien asuma esa responsabilidad.

Señor presidente, señores senadores, he planteado algunos de los argumentos que nos han llevado a la elaboración del dictamen en consideración, que estimamos equilibrado, armónico y respetuoso de las diferentes posiciones sustentadas en este tema. Hemos tenido la precaución de consultar a todos los sectores involucrados; algunos manifestaron sus inquietudes concurriendo a este Congreso y otros las han hecho llegar mediante notas. Pero, igualmente, en ambos casos, todas fueron tenidas en cuenta a la hora de elaborar cada uno de los artículos del proyecto en consideración.

De esta manera, señor presidente, estamos poniendo punto final a esta cuestión y concretando un avance importante tanto en lo referente a la finalidad de las obras sociales como a la defensa de un principio fundamental de los trabajadores como lo es el de considerar que las obras sociales son de su propiedad y tienen la suficiente autonomía como para gobernarlas y controlarlas. Sin dudas, ello redundará en un beneficio para todos los afiliados ya que se podrán ofrecer mejores prestaciones a la hora de cubrir las diversas necesidades.

Finalmente, quiero aclarar que luego de haber confeccionado el dictamen que ahora está en consideración del cuerpo, continuamos recibiendo inquietudes que, junto al senador Miranda, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hemos tenido en cuenta y que utilizaremos para hacer algunas modificaciones cuando se aborde el tratamiento en particular, que seguramente, enriquecerá y mejorará la sanción que produzca este Senado.

Quisiera que quede perfectamente aclarado que el tratamiento de este tema no ha estado cerrado a ningún tipo de inquietud; al contrario, se ha tenido como único objetivo lograr la sanción de una ley que sea aplicable y contemple todos los beneficios que habíamos previsto originariamente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Salum.** — (*Lee*) Señor presidente: no voy a entrar a abundar en detalles excesivamente técnicos acerca de este proyecto que estamos tratando. Pero creería que estamos equivocando el camino si centráramos exclusivamente la cuestión en generar un debate acerca de porcentuales de aporte, bases mínimas o formas de financiación, que son puntos a debatir, por supuesto. Pero la cuestión principal es otra: se trata de generar una norma jurídica que, amparando el derecho de los trabajadores al acceso a la salud, no entre en colisión con el concepto de autonomía universitaria. Esto es lo que tenemos que discutir.

Sobre el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados se han realizado algunas modificaciones que apuntan a sustentar la idea de que, más que perfeccionar el texto ingresado, lo que se ha querido hacer es otra cosa. Esto es lo que —aun convencido de la importancia de la existencia de una norma que debería cubrir el verdadero vacío legal— me ha llevado a apoyar el dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Educación, pero efectuando una disidencia parcial vinculada, fundamentalmente, con esas modificaciones. Voy a tratar de explicar, entonces, en qué consisten estos cambios introducidos.

En primer lugar, se le ha quitado poder al Consejo Superior de la Universidad hasta reducirlo prácticamente al papel de mero espectador, a través de una nueva redacción de los artículos 5º y 7º. En efecto, en el artículo 5º encontramos que, por sobre lo que era un Consejo Directivo integrado por representantes docentes, no docentes y del Consejo Superior, se ha girado en un pie de igualdad a un Consejo Directivo integrado por representantes docentes, no docentes afiliados y una representación del Consejo Superior. Es obvio que esta redacción trasluce el rol de mero testigo que se le otorga a esa única representación del Consejo Superior de la universidad, con poder de decisión nulo.

Se intenta alegar que es una contradicción la presencia de representantes del Consejo Superior Universitario en la composición del Consejo Directivo de una organización de los trabajadores. Y, entre otras cosas, se argumenta que en ese Consejo Superior Universitario existen representantes del claustro estudiantil, los que eventualmente tendrían la facultad de tomar decisiones sobre asuntos que no los involucran. Alegar esto es poner en tela de juicio nuestro sistema universitario e implica un desconocimiento total del rol del Consejo Superior. Es que preci-

samente el Consejo Superior debe estar presente en el Consejo Directivo, y entendemos al Consejo Superior como un organismo universitario que compone la Dirección de la Obra Social en tanto organismo y no en tanto grupo de personas. Estos representantes del Consejo Superior —y estoy hablando en plural de una representación con poder para tomar decisiones, y no de un mero testigo de los acontecimientos— están allí para velar además por el patrimonio material y humano que integra la obra social y que actualmente pertenece a la universidad.

El artículo 7º sigue la misma línea. Todos sabemos la importancia que para la propia vida interna de una obra social —mejor dicho, de todo tipo de organización social— tienen sus estatutos. Pues bien, la facultad del Consejo Directivo de proponer estatuto y sugerir modificaciones —originalmente nombrándose al Consejo Superior como instancia superior encargada de su aprobación— ha sido trasladada en la modificación a la Asamblea de Afiliados. Esta es una medida que, si bien es muy loable desde el punto de vista discursivo, encontrará obstáculos de índole práctica en lo que hace a la discusión de normas excesivamente técnicas o a todo aquello que signifique poner la información de un auténtico sistema gerencial al alcance y comprensión de los afiliados.

Y qué hablar de lo que significaría la convocatoria efectiva de esa asamblea que, desde el punto de vista práctico, resulta de una imposibilidad concreta. Tomemos, por ejemplo, el caso de la Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), la que cuenta con aproximadamente 65 mil afiliados. Una asamblea que los convoque se encontraría ante dos posibilidades: una, la más realista, la de la falta de presentismo, la de la escasa convocatoria. Entonces supongamos que esa asamblea reúna, en un cálculo optimista, 2.500 afiliados —un 3 por ciento del total del padrón de la obra social—, ¿podríamos denominar a eso un proceso completamente democrático? La otra posibilidad es casi risueña: una convocatoria con elevada asistencia. Imaginemos, entonces, la reunión de 50 mil afiliados, con lo que ello significaría en términos prácticos y operativos.

En segundo lugar, se ha modificado la definición de los actores de cuya voluntad depende la creación de las nuevas obras sociales. En el artículo 2º, la expresión “comunidad universitaria” se ha reemplazado por “trabajadores universitarios”. No creemos que sea correcto el argumento esgrimido acerca de que el concepto de “comunidad universitaria” —que engloba no taxativa-

mente a los tres claustros— presenta los inconvenientes de dar participación a sujetos ajenos al quehacer estrictamente laboral —o sea, el claustro de estudiantes— y no dársela a los no docentes. El gobierno de la universidad se manifiesta a través del Consejo Superior y es precisamente ese organismo el que representa a la comunidad universitaria, a la que, por otro lado, entendemos —como ya dijimos antes— no solamente con la enumeración clásica de los tres claustros, sino también con la incorporación de los trabajadores no docentes.

En tercer lugar, hay cambios en la autoridad de aplicación. En la sanción de Diputados, el artículo 9º establecía como competente cada una de las universidades, dejando abierta la posibilidad de la supervisión de las prestaciones de salud en el Ministerio de Salud y Acción Social.

Pero la nueva redacción cambia el eje de la cuestión y establece como autoridad de aplicación, en todo aquello que tenga relación con las prestaciones médico-asistenciales, al Ministerio de Salud y Acción Social, redacción poco feliz porque cambia el centro de gravedad, que estaba ubicado en la universidad, para colocarlo en el Ministerio.

Señor presidente: esta norma generará un foco de conflicto entre las obras sociales universitarias y las universidades respectivas en lo que se refiere al patrimonio de las mismas, tanto para los recursos materiales como —lo más importante— para recursos humanos. La vigencia de esta norma, que hoy estamos debatiendo, significa una transferencia patrimonial para las universidades como nunca en su historia han padecido. Transferencia que, principalmente en lo que hace al personal, muchas universidades han adelantado que no se pueden permitir el lujo de consentir, lo que llegado el caso las obligará a redistribuir a los empleados en otras áreas de la institución, generándose de esa manera un perjuicio que afectará eventualmente a los afiliados en lo que hace a la continuidad y calidad de las prestaciones.

Además, ¿por qué introducir modificaciones en una situación que hasta el presente se ha revelado como efectiva? Todos sabemos que las obras sociales universitarias son eficientes. En su gran generalidad se autoabastecen y no precisan de aportes externos. Y los servicios que brindan a sus afiliados son de calidad, destacándose muchas de ellas por el alto nivel profesional marcado por los especialistas que allí se desempeñan, la gran mayoría académicos de las facultades respectivas.

Existen pedidos de sectores universitarios para que no se dicte una ley que cambie la situación actual, porque estas obras sociales se hicieron para proteger a los afiliados y las universidades pagan sueldos y gastos administrativos, lo que permite el buen funcionamiento de las obras sociales y brindar el excelente servicio actual.

¿Por qué intentar legislar ahora, entonces, para una obra social en particular, cuando estamos en conocimiento, además, de que el Poder Ejecutivo nacional está impulsando un proyecto de ley de obras sociales? ¿No es más conveniente a los intereses de los trabajadores esperar la vigencia de esa regulación marco, y no crear excepciones anteriores a la existencia misma de una regla general? Es que el asunto parece ser otro.

En este recinto, todos creemos firmemente en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la lucha por asegurarles el acceso a un sistema solidario de salud y a obras sociales eficientes. Y también sostenemos como fundamental el principio de la autonomía universitaria, definido en aquellos históricos sucesos de la Reforma de 1918: Precisamente, aquellos hombres nos dejaron el Manifiesto Liminar surgido en esas jornadas aquello de que *Hemos resuelto llamarles a las cosas por sus nombres*. De eso se trata, señor presidente, de no permitir —utilizando el argumento de “obras sociales de los trabajadores”— avanzar sobre la autonomía universitaria, intención que quedó cristalinamente demostrada en el decreto 903/95, y generar una confrontación allí donde no debe existir. Y eso es, precisamente, *llamarles a las cosas por sus nombres*.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del bloque liberal.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: viene a consideración este proyecto referido en el orden del día 1.006, que establece una nueva variación respecto de las obras sociales, ya que las obras sociales universitarias habían sido excluidas del régimen general. Vino luego el decreto del Poder Ejecutivo número 903/95, al cual se han referido otros oradores previamente.

Estamos obligados a analizar —excluyo algunas consideraciones para acelerar mi exposición— este orden del día. Yo, como representante de Corrientes, provincia que es sede de la Universidad Nacional del Nordeste, no puedo eludir expresar la opinión que me ha hecho llegar con mucho énfasis el rectorado de esa casa de estudios, contraria a la sanción que hoy se apresta a dar este Senado, conforme al dictamen de mayoría. En el fondo, se hace una serie de

referencias como las que acaba de adelantar el señor senador por Jujuy, lo cual demuestra que la oposición a la sanción que hoy aparentemente va a dictar este Senado no es sólo de la Universidad Nacional del Nordeste.

Efectivamente, el artículo 1º del dictamen que consideramos modifica el status jurídico de las obras sociales universitarias, que pasarán a ser entidades de derecho público no estatal con individualidad jurídica, financiera y administrativa, y tendrán el carácter de sujeto de derecho.

Sobre el particular, quiero leer parte de una nota que me remitió con fecha 18 de septiembre el rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste. Dice así: "Consideramos que el funcionamiento de las Obras Sociales sin el paraguas de la universidad por el número de usuarios y características de los posibles afiliados no podrá soportar mantenerse y se producirá la fragmentación en muy poco tiempo.

"Pretendemos que se mantenga la situación actual, que en el caso de la Universidad Nacional del Nordeste, es un Instituto de Servicios Sociales para Empleados de la Universidad, con cobertura por el Consejo Superior, y apoyo económico y administrativo de la Universidad".

Como puede observarse, el artículo 1º que he citado previamente imposibilitaría la continuación del referido instituto, razón por la cual debe modificar sus estatutos y su situación jurídico-legal a efectos de adecuarlos a la nueva reglamentación.

El artículo 2º del proyecto que estamos considerando establece: "En aquellas universidades en las que no existan obras sociales universitarias, las mismas podrán ser creadas conforme lo establecido en la presente ley o podrán mantenerse en la cobertura actual"...

—Murmillos en las bancas.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: voy a interrumpir mi exposición...

**Sr. Presidente (Menem).** — Ruego a los señores senadores que respeten al orador en el uso de la palabra.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Perdón, señor presidente, pero resulta muy difícil exponer en esta forma.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene razón señor senador, ya tomé las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Voy a leer de nuevo el artículo 2º, por si algunos señores senadores no escucharon o no lo estudiaron.

"En aquellas universidades en las que no existan obras sociales universitarias, las mismas podrán ser creadas conforme lo establecido en la presente ley o podrán mantenerse en la cobertura actual, mediante convenios u otros instrumentos jurídicos, de acuerdo a la voluntad de los trabajadores universitarios respectivos".

Este artículo aparece como claramente discriminatorio, por cuanto las universidades que no tengan obra social pueden contratar o suscribir convenios en forma diferente a lo que establece el sistema que hoy vamos a legislar, algo que en cambio les está vedado a las universidades que cuentan actualmente con obra social, en virtud de lo prescripto en el artículo 1º.

Otro aspecto cuestionable —y en este sentido sigo citando la opinión de la Universidad Nacional del Nordeste— es el relativo a los bienes muebles e inmuebles definidos en el inciso e) del artículo 8º, los cuales, en función del dictamen que estamos analizando, se considerarían como propiedad de la obra social universitaria.

Al respecto cabe citar la opinión del rector de la Universidad Nacional del Nordeste, doctor Torres, incluida en la nota a que aludí anteriormente, que dice así: "Sabido es que, como hasta este momento, la personalidad jurídica de las obras sociales la detenta la Universidad, necesariamente ella es la titular de todos los bienes registrables. En consecuencia es la propietaria de todos los bienes que forman parte del patrimonio de la Universidad, incluidos los que están afectados al uso de las obras sociales".

Como puede observarse, por la aplicación del inciso e) del artículo 8º se van a generar situaciones conflictivas respecto de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Universidad actualmente asignados a la obra social.

Para el caso de la Universidad Nacional del Nordeste resultaría extremadamente difícil especificar qué bienes corresponden a una o a la otra, ya que los inmuebles asignados a la obra social fueron adquiridos con fondos perenecientes a esta casa de altos estudios. Con respecto a los bienes muebles, gran parte de ellos fueron cedidos en uso y no en propiedad a la referida obra social.

En resumidas cuentas, recogiendo la opinión del doctor Torres, resultaría difícil desafectar bienes muebles e inmuebles que siguen siendo propiedad de la referida Universidad para transferirlos a la obra social respectiva. Hasta el mo-

mento, gracias al apoyo de la Universidad Nacional del Nordeste, el Instituto de Servicios Sociales desarrolla sus tareas con eficacia y suficiencia en cuanto a los objetivos que se persiguen, y la Universidad puede seguir prestando este apoyo respaldándose en la garantía que le significa conservar la titularidad de dichos bienes.

Por el contrario, si dichos bienes fueran sustraídos del patrimonio de la Universidad —según opinión de su rector, doctor Torres, quien a su vez tiene reservas por su falta de influencia en la designación de las autoridades del Instituto de Acción Social—, se crearía una situación de incertidumbre futura para un instituto que hasta el momento ha funcionado satisfactoriamente.

En síntesis: conforme la opinión que vengo citando, la aplicación de la normativa citada traería perjuicios al patrimonio y al presupuesto de la Universidad Nacional del Nordeste.

En otro orden de cosas, quiero recordar que actualmente la obra social de esta universidad es un instituto de servicios sociales para su personal. Asimismo, la universidad abona los haberes de su personal, sus recursos propios ingresan y se contabilizan dentro de su presupuesto, tiene CUIT y es la responsable final de todos los actos jurídicos en que interviene.

En base a estas especificaciones, que comparto, debo expresar mi oposición a una norma que intenta reglamentar en forma general el tema de las obras sociales sin considerar casos particulares como este que vengo exponiendo. Me parece correcto seguir la opinión de aquellos que pretenden o postulan que este tema quede circunscripto a lo que cada universidad resuelva de acuerdo con las circunstancias de hecho y de derecho que afectan a su personal y a sus bienes. Es decir, que en este caso se respeten los criterios de autonomía y de autarquía universitarias definidos en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional.

Por estas razones, recogiendo la opinión señalada y solicitando que se incorpore al Diario de Sesiones la nota a que he aludido, que me fuera remitida por la Universidad Nacional del Nordeste, expreso mi oposición al proyecto en consideración.

**Sr. Avelín.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Ruego se sirvan anotar en la lista de oradores aquellos senadores que deseen hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Avelín.** — Señor presidente: el rectorado de la Universidad de San Juan está conforme con este proyecto de ley, pero propone efectuar algunos agregados, siempre y cuando lo permita la comisión. Por lo tanto, me gustaría que el señor senador que informó el proyecto tomara nota de las modificaciones.

En primer lugar, se propone agregar la frase "cualquiera fuera su régimen", en el segundo párrafo del artículo 1°. En consecuencia, la redacción sería la siguiente: "Las mismas serán libres de celebrar convenios y recibir, en calidad de adherentes, afiliados de otras obras sociales, cualquiera fuera su régimen, de acuerdo a las normas que establezcan la legislación vigente y los respectivos estatutos". Reitero que la propuesta que acabo de señalar me la hizo llegar la Universidad de San Juan.

En segundo lugar, se propone incorporar como artículo 12 el siguiente: Establécese que lo determinado en el artículo 1°, tercer párrafo, de la presente será de aplicación cuando se concrete la desregulación total del sistema nacional de seguridad social. Por lo tanto, el artículo de forma pasaría a ser el 13.

Esta última modificación que se propone tiene por objeto que el régimen de libre elección de obra social, estipulado por el tercer párrafo del artículo 1° de proyecto, entre en vigencia en el mismo momento que la desregulación de todas las obras sociales; tal manera que la libre elección de obras sociales corra pareja para todos los trabajadores.

Antes de finalizar mi exposición, quiero dejar constancia de que la obra social de la Universidad de San Juan ha trabajado, atendido y dado amplia cobertura a sus afiliados, incluso cubriendo a veces hasta el ciento por ciento de los costos de atención médica y de todas las prácticas que se suelen realizar, además de proveer los elementos complementarios. Es decir que trabajó muy bien; ha estado ordenada y bien manejada desde el punto de vista económico.

**Sr. Presidente (Menem).** — Antes de pasar a votar, la Presidencia señala que como se trata de un proyecto de ley que viene en revisión, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución Nacional es necesario certificar la mayoría con la que, en su caso, se sanciona la iniciativa. Por lo tanto, se solicita a los señores senadores que marquen de manera notoria su voto, a efectos de facilitar el conteo que llevará a cabo la Secretaría.

**Sr. Genoud.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** — Señor presidente: tal como lo expresara el señor senador por Jujuy, en la votación en general el bloque de la Unión Cívica Radical va a pronunciarse por la negativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobado. Se registraron 30 votos por la afirmativa y 13 por la negativa.

En consideración en particular.

—Se enuncia el artículo 1º.

**Sr. Avelín.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Avelín.** — Señor presidente: solicito al señor miembro informante por la mayoría se sirva aceptar la incorporación que manifesté anteriormente.

**Sr. Presidente (Menem).** — ¿El señor senador se refiere al artículo 1º?

**Sr. Avelín.** — Así es.

**Sr. Presidente (Menem).** — Hay una propuesta de modificación del artículo 1º.

Para referirse a ella, tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Martínez Almudevar.** — La referencia es a cualquiera sea el régimen que asiste a los que pretenden afiliarse.

Sí, señor presidente; la modificación propuesta es aceptada.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con la modificación propuesta por el señor senador por San Juan del bloque Cruzada Renovadora.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobado. Se registraron 39 votos por la afirmativa y 5 votos por la negativa.

—Se enuncia el artículo 2º.

**Sr. Storani.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Storani.** — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para poner en este artículo la

sustitución de la expresión “trabajadores universitarios” por la de “comunidad universitaria”.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Martínez Almudevar.** — Señor presidente: nosotros introdujimos esta nueva forma de redacción porque pensamos —en realidad, estamos convencidos— que los verdaderos dueños de las obras sociales son los trabajadores universitarios. En consecuencia, consideramos que es adecuada la modificación que proponemos.

Por lo expuesto, no aceptamos la modificación sugerida por el señor senador por Córdoba.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º con el texto que figura en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobado. Se registraron 30 votos por la afirmativa y 14 por la negativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 3º.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se registraron 32 votos por la afirmativa y 12 por la negativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 4º.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se registraron 34 votos por la afirmativa y 10 por la negativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 5º.

**Sr. Miranda.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

**Sr. Miranda.** — Señor presidente: solicito al señor miembro informante se sirva aceptar una propuesta de modificación al artículo 5º en lo que hace a cómo se tiene que designar a los integrantes del Consejo Directivo.

Si bien es cierto que el artículo 5º determina quiénes integran el Consejo Directivo, no lo hace en cuanto a la forma en qué se designa a sus integrantes ni su número.

Por lo tanto, solicito al señor miembro informante acepte la siguiente modificación. El texto quedaría de esta forma: “Cada obra social se organizará de acuerdo a sus estatutos, debiendo estar integrado el Consejo Directivo con representantes de los docentes, no docentes afiliados y jubilados elegidos por voto directo y secreto de los mismos, y una representación del Consejo Superior de la universidad respectiva que contemple en forma igualitaria a los dos estamentos mencionados”.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Storani.** — Señor presidente: voy a proponer una redacción diferente a la que acabamos de escuchar, a fin de que se haga referencia a una representación docente, no docente y del consejo superior de la universidad respectiva.

Hago esta propuesta teniendo en cuenta que el consejo superior no puede estar representado solamente por un miembro, habida cuenta de la importancia que tiene el financiamiento de la obra social y lo que hace al concepto integral de universidad y a su autonomía. El Consejo Superior debe tener una representación suficiente, que naturalmente dejo librada al estatuto, que organizará finalmente las representaciones del consejo directivo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Martínez Almudevar.** — Señor presidente: acepto la propuesta de modificación del señor senador Miranda y rechazo la del señor senador por Córdoba.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5° con la modificación propuesta por el señor senador por Tucumán.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobado. Se registraron 30 votos por la afirmativa y 16 por la negativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 6°.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se registraron 35 votos por la afirmativa y 10 por la negativa.

—Se enuncia el artículo 7°.

**Sr. Storani.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Storani.** — Señor presidente: propongo una modificación al inciso a) del artículo 7°, que quedaría redactado de la siguiente manera: "Proponer el estatuto de funcionamiento y las modificaciones que sobre él deban realizarse al Consejo Superior, quien resolverá sobre su aprobación".

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Martínez Almudevar.** — Para seguir en línea con las modificaciones que hemos aprobado, no podemos admitir la propuesta del señor senador por Córdoba.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7° tal como figura en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobado. Se registraron 30 votos por la afirmativa y 15 por la negativa.

—Se enuncia el artículo 8°.

**Sr. Miranda.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

**Sr. Miranda.** — Señor presidente: solicito al miembro informante la modificación del inciso b), que diría lo siguiente: "Un aporte a cargos de los empleados del tres por ciento 3% de su sueldo, calculado sobre la base de jornada laboral completa", eliminando el párrafo que se refiere al tema pero no en forma taxativa, cuando habla de calcularse sobre una base mínima igual a la jornada completa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Martínez Almudevar.** — Señor presidente: en el dictamen de mayoría habíamos pensado que esa atribución se la dejábamos al Consejo Directivo de cada universidad, a los efectos de evitar malas interpretaciones en el sentido de que desde el Congreso podíamos provocar, particularmente en el espectro de los docentes de tiempo parcial, una disminución de su salario de bolsillo. Pero me parece aceptable correr este riesgo, porque queda determinado en forma taxativa el mismo objetivo que nosotros pretendíamos de que el aporte de ellos sea precisamente del 3 por ciento sobre jornada completa. Acepto la modificación propuesta.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar el artículo 8° con la modificación propuesta por el señor senador por Tucumán y aceptada por el miembro informante de la mayoría.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobado. Se registraron 34 votos por la afirmativa y 11 por la negativa.

—Se enuncia el artículo 9°.

**Sr. Storani.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Storani.** — Señor presidente: voy a proponer la siguiente redacción al artículo 9°: "Será autoridad de aplicación de la presente ley cada

una de las universidades, las que darán el encuadre necesario para el funcionamiento legal de cada obra social”.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Martínez Almudevar.** — Por los argumentos expuestos sobre la responsabilidad irrenunciable del Estado en lo que es tutelar la salud y, sobre todo, ampliando el régimen de incorporación de afiliados a la obra social universitaria y tratándose de prestaciones obligatorias, creemos que es ineludible dejar que en lo médico-asistencial sea exclusivamente el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación el órgano de aplicación. En consecuencia, mantenemos el texto expresado en el dictamen de mayoría.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Salum.** — Señor presidente: el artículo 9º, tal como está redactado en el dictamen de mayoría, dice: “Será autoridad de aplicación de la presente ley; en todo aquello que tenga relación con las prestaciones médico-asistenciales, el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación”. ¿Y qué sucede con el resto? ¿Quién es la autoridad de aplicación? Propongo que, en lo que se refiera a todas las restantes cuestiones, entienda la universidad respectiva. de lo contrario, en el artículo quedaría sin determinar quién es la autoridad de aplicación de las restantes funciones que cumple la obra social.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Martínez Almudevar.** — El resto de las funciones, que no incluye al Ministerio de Salud y Acción Social, obviamente será ejercido por el Consejo Directivo de la obra social, en lo que es administrativo.

**Sr. Presidente (Menem).** — ¿O sea que no acepta la propuesta?

**Sr. Martínez Almudevar.** — Así es. No aceptamos la propuesta.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Avelín.** — Señor presidente: no sé si puedo colaborar con la siguiente propuesta: “Será autoridad de aplicación de la presente ley, en todo aquello que tenga relación con las prestaciones médico asistenciales, el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, con participación de la universidad correspondiente”.

Vale que la universidad también participe, aunque no tenga voto, para dar más armonía a este planteo de la obra social.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Martínez Almudevar.** — No me parece que ello sea adecuado y que solucione el problema planteado.

Interpretamos que es el Consejo Directivo, dentro de sus funciones —como lo especifica bien el artículo 7º—, quien se debe hacer cargo del resto, de lo atinente a la administración y al control de la obra social universitaria.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar el artículo 9º tal como está en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobado. Se registraron 31 votos por la afirmativa y 16 por la negativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 10.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se registraron 32 votos por la afirmativa y 15 por la negativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 11.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se registraron 32 votos por la afirmativa y 15 por la negativa.

—El artículo 12 es de forma.

**Sr. Avelín.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Avelín.** — Señor presidente: propongo un nuevo artículo, en lugar del artículo 12 original, con el siguiente texto: “Establécese que lo determinado en el artículo 1º, tercer párrafo, de la presente será de aplicación cuando se concrete la desregulación total del Sistema Nacional de Seguridad Social”.

Ello tiene por objeto que el régimen de libre elección de obra social, estipulado por el artículo 1º, tercer párrafo, entre en vigencia en el mismo momento en que se produzca la desregulación de todas las obras sociales; de tal manera que la libre elección de las obras sociales corra pareja para todos los trabajadores.

Este es el fundamento del nuevo artículo 12 que propongo y que he leído precedentemente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Señor senador por La Pampa...

**Sr. Martínez Almudevar.** — No aceptamos la propuesta, señor presidente.

En realidad, la libre elección está en vigencia. Asimismo, el plazo de 270 días establecido hasta la puesta en vigencia de esta disposición posibi-

lita que la desregulación, que ya está en marcha, se encuentre en plena aplicación.

Por lo expuesto, considero que la propuesta formulada posibilitaría la generación de algún conflicto que, en virtud de la redacción originaria, sería evitado.

**Sr. Presidente (Menem).** — Señor senador por San Juan: ¿insiste en el agregado del artículo propuesto o lo retira?

**Sr. Avelín.** — No, señor presidente. De antemano sé que voy a perder; así que no insistiré. (*Risas.*)

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda sancionado el proyecto de ley en la forma y por las mayorías indicadas<sup>1</sup>.

En consecuencia, vuelve a la Honorable Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen.

Se va a votar el pedido de inserción solicitado.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se procederá en consecuencia<sup>1</sup>.

### 3

#### CUARTO INTERMEDIO

**Sr. Galván.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja del bloque de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Galván.** — Señor presidente: solicito que la Cámara se constituya en Tribunal de Juicio Político para tratar sendos proyectos...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si me permite, señor senador...

La Presidencia ruega a los señores senadores que mantengamos una sola sesión. Aquí se están produciendo varias reuniones al mismo tiempo y eso perturba en el uso de la palabra al señor senador por La Rioja.

**Sr. Galván.** — Muchas gracias, señor presidente.

Obran en Secretaría dos proyectos de resolución relacionados con los juicios políticos seguidos a los jueces Trovato y Vera Ocampo.

En consecuencia, solicito que la Cámara se constituya en Tribunal de Juicio Político a efectos de considerar las referidas iniciativas.

**Sr. Presidente (Menem).** — Solicito al señor senador por San Juan doctor Avelín que se haga

<sup>1</sup> Ver al Apéndice.

cargo de la Presidencia, toda vez que estoy excusado de intervenir en el juicio político al juez doctor Trovato.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Alfredo Avelín.

**Sr. Presidente (Avelín).** — A continuación será constituida la Cámara en Tribunal de Juicio Político.

—Son las 17 y 49.

—A las 18 y 4:

**Sr. Presidente (Avelín).** — Continúa la sesión.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

### 4

#### ZONA FRANCA EN JUSTO DARACT, SAN LUIS

**Sr. Quinzio.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Quinzio.** — Señor presidente: pido el tratamiento sobre tablas del proyecto contenido en el expediente S.-2.354/96, proyecto de resolución del señor senador Agúndez por el que se solicita al Poder Ejecutivo que reglamente el funcionamiento de la zona franca en la ciudad de Justo Daract. Se trata de un proyecto de gran trascendencia para la provincia de San Luis por la generación de empleo que puede llegar a producir. De allí entonces la urgencia para su tratamiento.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por San Luis.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Piuizzi).** — (*Lee*)

#### Proyecto de resolución

*El Senado de la Nación*

#### RESUELVE:

Artículo 1º — Solicitar al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de la Administración Nacional de Aduanas, apruebe el Reglamento Aduanero para poner en marcha la zona franca de Justo Daract (provincia de San Luis), que fuera entregada, luego del acto licitatorio